



GUERRERO

un año sin policía y sin mafia

UN AÑO DE AUTODEFENSAS

Las noticias provenientes de Guerrero repiten desde hace meses información de los grupos de autodefensa o policías comunitarias. Pocos entienden quiénes son, si están vinculados al narcotráfico o a la guerrilla, por qué algunos de sus dirigentes han sido encarcelados.

POR **CARLOS ACUÑA** • @esecarlo
FOTOGRAFÍAS: **EDUARDO LOZA**

La realidad, aunque compleja y difícil de entender a simple vista, es que las autodefensas son un auténtico poder, un freno a la inseguridad, un modelo de organización social con fallas y debilidades, pero con la virtud de que quienes las integran son gente del pueblo: campesinos, pequeños ganaderos, comerciantes, amas de casa.

A un año de su surgimiento, las policías comunitarias han logrado lo que parecía imposible: han acabado prácticamente con la inseguridad en 46 de los 81 municipios del estado. La clave, en voz de Bruno Plácido, el cerebro detrás de su creación: “Somos pueblo. Pueblo organizado”.

ESCENARIO #1: TIERRA COLORADA

Nemurio Carranza recuerda los gritos. Las voces de cientos de campesinos, ganaderos y comerciantes de la Montaña y la Costa Chica de Guerrero. Hartos de la policía, del Ministerio Público, de cualquier autoridad, nadie exigía justicia esa mañana.

–¡Cuello! ¡Cuello!– gritaba el tumulto en el cruce de la carretera federal y la vía que conduce al centro de Tierra Colorada, un pequeño pueblo a una hora de Acapulco, Guerrero, y exigía la muerte de un hombre llamado Ulises por razones que ya conocerán más adelante.

Han pasado nueve meses desde aquel 26 de marzo de 2013. Nemurio Carranza fuma con la calma de quien se sabe dueño de toda la madrugada; una bocanada de humo cubre su cara. En su regazo descansa un fusil de madera, tan viejo que es increíble que aún funcione. Es un rifle de caza, explica, sólo puede disparar un tiro. No necesita más. Aquí, en este pedazo de Guerrero, los narcotraficantes no saben disparar. Sus cuernos de chivo, sus metralletas, no les sirven para nada. Nemurio se ríe. Son chamaquillos todos, sin entrenamiento. Los campesinos de la sierra, en cambio, crecieron disparándole a las palomillas en el campo. Si acaso hay que matar a alguien, basta una sola bala.

Esa mañana, recuerda clarito Nemurio, cientos de campesinos con el ojo igual de afilado encañonaron a un solo hombre: Ulises Valle García, titular de Seguridad Pública del municipio de Juan R. Escudero, cuya cabecera es Tierra Colorada.

Mientras Ulises dormía plácidamente, una interminable hilera de luces avanzaba por la oscuridad de la sierra. Una tras otra, más de 100 camionetas *pick-up* llegaron desde Cuatepec, Marquelia, San Marcos, Azoyú, Tecoanapa y muchos más pueblos. En total mil 800 hombres. Eran las autodefensas presumiendo, por primera vez, el alcance de sus fuerzas. Agrupadas en la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG), éste era el operativo más importante desde su aparición.

Apenas un mes antes, en Xaltianguis, un poblado ubi-

cado al norte del municipio de Acapulco, los grupos de la UPOEG habían detenido a un par de secuestradores y asesinos luego de casi dos horas de intercambiar disparos. Los llevaron a la Procuraduría de Justicia del Estado, cuyos voceros informaron que portaban un rifle de asalto AK-47, chalecos antibalas, proyectiles 7.62 y uniformes con el logotipo de la Policía Ministerial del Estado.

Lo más importante: declararon en video, según los dirigentes de la UPOEG, que actuaban bajo la protección de Ulises Valle.

–En Tierra Colorada todos sabían que Ulises Valle protegía y operaba con *La Maña*– dice Nemurio. Sus palabras se enlazan con gusto. A sus 58 años, ha acompañado a la policía ciudadana desde su creación como policía raso-. Nos dimos cuenta de que también allí, como en todas partes, las autoridades eran parte de la delincuencia.

La furia se había desatado un día antes, cuando Guadalupe Quiñones, comandante de la UPOEG, fue amenazado por la delincuencia de Tierra Colorada. Y aunque las autoridades del municipio fueron advertidas, Quiñones apareció acribillado dentro de un taller mecánico.

La noticia estalló como un polvorín en la sierra. Y fue cuando el convoy de camionetas se enfiló a despertar a Ulises Valle. Lo sacaron de su sueño y de su casa y lo llevaron al cruce de la carretera federal, donde fue exhibido públicamente.

La gente, habitantes y policías ciudadanos, pedía a gritos su muerte. “¡Cuello, cuello, cuello!”

Ya eran las 11 de la mañana cuando un hombre de barba rala y baja estatura se abrió paso, con actitud altiva y confiada, entre la multitud. Sólo su presencia evitó que todo terminara en un linchamiento público. Cuando nació lo registraron como Bruno Plácido.

–¡Pásenme una pistola y tráiganme para acá a ese pen-dejo!– gritó Bruno-. Y cuando Valle García estuvo frente a él, lo miró de abajo hacia arriba y con su acento costeño, mientras señalaba un folder lleno de papeles, le dijo: “Tengo toda tu investigación en estos papeles, cabrón.

Me vas a contar con quién estás metido. Si no me dices toda la verdad, si no coincide con lo que yo traigo, te mueres. Todos nosotros te matamos aquí mismo”.

–Si hablo me van a matar de todas formas –alcanzó a responder Ulises Valle, aguantando las lágrimas.

–En eso hubieras pensado, hijo de tu madre, antes de hacer chingaderas.

Aquella mañana, dentro de su camioneta, en privado, Ulises Valle confesó a Bruno Plácido y a Ernesto Gallardo, principales líderes de la UPOEG, sus nexos con los grupos criminales de la zona. Sus declaraciones fueron grabadas y gracias a ellas fueron detenidos otros 14 policías y seis narcomenudistas, que serían entregados a la Procuraduría de Justicia del Estado.

Nemurio da la última bocanada a su cigarro. “Nos chin-gamos bien a ese cabrón”, suspira y, al apagar su colilla, la madrugada queda en silencio. Nemurio no dice que Ulises Valle y los 14 policías detenidos fueron liberados un mes después, con el argumento de que había falta de pruebas a pesar de las declaraciones grabadas.

Valle vive actualmente en Chilpancingo, retirado de su cargo; y en Tierra Colorada, las policías municipal, ministerial y estatal no pueden operar sin la autorización de los grupos de autodefensa.

–A Ulises Valle le quedan tres caminos –dirá semanas después Ernesto Gallardo, el comandante regional de la UPOEG–. O se larga de Guerrero, o lo consignan de nuevo, como exigimos, o lo matamos nosotros.

ESCENARIO #2: RANCHO NUEVO

Las luces del auto de Gonzalo Torres se posan sobre un puñado de sombras. Cinco hombres fuman en silencio, sentados detrás de una pequeña barricada instalada en mitad de la carretera que va de Ayutla a Tutepec, un camino de terracería imposible de adivinar de noche. Alrededor no hay nada. Campo abierto con algunos sembradíos de maíz desperdigados en la oscuridad. Aquí, apenas a unos cuantos kilómetros, comenzó la historia armada de la UPOEG.

Eusebio García ha pasado las últimas 10 horas en este puesto de control, interceptando a cualquier vehículo extraño. Es un hombre rechoncho, moreno y con el recelo cruzándole la cara. Hace meses que dejó de hablar de lo ocurrido hace un año. Acepta sólo porque Gonzalo Torres, vecino, promotor y miembro importante de *El movimiento*, se lo pide personalmente.

–Fue el 5 de enero de 2013. A eso de las 10 de la noche. Salí, para hacer mi necesidad en el jardín, y entonces me hablan, con un chiflido. Eran dos encapuchados. Me agarraron del cuello y me descontaron con un chingazo en la nuca –Eusebio narra con la agilidad que le permite su voz atropellada y su dentadura llena de agujeros. Dos tristes ojos amarillentos parpadean todavía con miedo–. Me subieron a un tsuru blanco, en la cajuela. No me dijeron nada, que los acompañara nada más, pero allí mero supe que amanecería muerto.

Unas semanas antes, Eusebio había rendido protesta como comisario comunitario de Rancho Nuevo. En Gue-



rrero, en la zona conocida como La Montaña, desde hace casi dos décadas es común que las poblaciones indígenas cuenten con una policía alternativa a los cuerpos oficiales.

En el momento de su secuestro unas 73 comunidades contaban con su propio grupo policia-co y sistema de justicia, agrupados todos en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC). Ese número se incrementaría luego de que en los últimos cuatro años la violencia del narcotráfico provocó que incluso en sitios con mínima población indígena se comenzaran a realizar detenciones y a ejercer la justicia sin la ayuda ni el permiso del gobierno.

Ya había pasado en Huamuxtlán, donde cientos de personas armadas con machetes habían retenido al alcalde interino dentro de su vivienda y, en medio de insultos y golpes, lo trasladaron a la plaza del pueblo. Sospechaban que estaba involucrado en el secuestro de varias personas. En Olinalá, 700 habitantes tomaron en el octubre de 2012 el ayuntamiento y desarmaron a los policías luego de que un hombre, acusado del secuestro y el asesinato de un joven taxista, fuera liberado sin ningún tipo de investigación. Tres días más tarde, en una comunidad de Cualac, el pueblo detuvo a un hombre acusado de violación. La policía preventiva impidió que lo lincharan.

En Rancho Nuevo, como en todo Ayutla, fueron las extorsiones las que detonaron la indignación de los habitantes. A través de la presidenta de la Sociedad Ganadera, Eusebio recibió la advertencia: el crimen organizado exigía que todos los ganaderos de la zona, sin excepción, pagaran una cuota de 500 pesos antes del 8 de enero.

Eusebio se reunió con los comandantes de El Potrero, de las Palmas y de Cerro Viejo y decidieron no pagar ni un centavo. Acordaron conseguir armas para defenderse en caso necesario. Tres noches antes de que se cum-



LIBRES DE DELINCUENCIA

Cada vez crece más el número de pueblos y comunidades que han implantado su propio sistema de seguridad.

“-Si hubiéramos esperado a que el Estado hiciera su trabajo, ya estaríamos muertos ahora -responde Bruno Plácido (en la imagen), cerebro detrás de la creación de la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero.



Fotografía: Carlos Alberto Carbaljal/El Sur

pliera el plazo fijado por la mafia, Eusebio estaba en un cuarto oscuro, sin camisa ni zapatos, con una bolsa de plástico en la cabeza. Alguien lo había delatado.

-¿Por qué andas haciendo reuniones en tu casa? -le preguntaron sus captores.

-Para qué me preguntan si ya saben -les respondió resignado. Sin dejar de recibir golpes, escuchó cómo llamaban a su familia y pedían 150 mil pesos a cambio de su vida. Intentó decirles que mejor lo mataran porque su vida era poquitera. No tenía más de 20 vacas y ganaba, apenas, 100 pesos al día. Pero una madera se estrelló contra su boca. Ni él ni sus secuestradores tenían manera de saber que esa llamada telefónica haría reventar todo el territorio.

Su familia avisó al resto de los comandantes y éstos regaron la voz. Los caminos amanecieron cerrados. Miles de personas, armadas con cualquier objeto que tuvieran a la mano, habían llegado a Ayutla con el propósito de rescatar al comisario y, de paso, tomar la cabecera municipal. Limpiar la zona de criminales y narcomenudistas.

La acción tuvo efecto. Lo liberaron.

-Yo me persigné cuando me tiraron. Dijeron que habían capturado a sus jefes y a mí me metieron en una bolsa de basura y me lanzaron pa' bajo, a la altura de Zempoalco -a un año de su secuestro, Eusebio parece tener todavía los golpes frescos. Se siente orgulloso de estar aquí, de decir que no lo tumbaron aquel día-. Había pasado un día sin agua y sin comer. Caminé hasta el río y ahí me bañé y bebí. Caminé seis horas, sin camisa ni huaraches, hasta que llegué a mi pueblo. Me estaban esperando. Fue cuando me enteré que todo había reventado.

ESCENARIO #3: CHILPANCINGO

Ninguno de los tres teléfonos de Bruno Plácido Valerio deja de sonar en toda la tarde. Bruno es líder y fundador de la UPOEG y antiguo miembro de la CRAC. Una parte de su vida puede rastrearse en los vericuetos y enredos de la policía comunitaria, la

autodefensa y los distintos intereses políticos y sociales que se juegan en cada organización.

Cuatro horas ha pasado Bruno sentado en una sala de espera en el edificio de Rectoría de la Universidad Autónoma de Guerrero, en Chilpancingo. Su enojo es evidente. Acostumbrado a un itinerario salvaje -brinca de reunión en reunión con empresarios, diputados, delegados o con miembros de su organización-, quedarse quieto tanto tiempo sin poder resolver nada debe ser una tortura. Hoy, Bruno tenía una cita con el rector de la universidad para hablar sobre la realización de una encuesta que evaluara la actuación de las autodefensas, pero el rector lo ha plantado.

El tiempo muerto lo han llenado los periodistas que no dejan de acecharlo por teléfono. Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), presentó ayer el “Informe Especial sobre los Grupos de Autodefensa y la Seguridad Pública en el Estado de Guerrero”, y ahora todos quieren tener su reacción, su opinión.

En el documento se afirma que los grupos de autodefensa dominan más de la mitad del territorio guerrerense como consecuencia del vacío en materia de seguridad. “Se advirtió la presencia de los mencionados grupos (de autodefensa o policía comunitaria) en las siete regiones y en 46 de los 81 municipios de Guerrero”. En términos de población, destaca, en esos municipios vive 65 por ciento de la población total del estado.

Para la CNDH, ante el abandono o el fracaso de las autoridades estatales y municipales, las autodefensas “ejercen funciones a las cuales el estado de Guerrero no sólo ha renunciado, sino que ha delegado en los grupos de autodefensa”.

Según el informe, de los seis grupos de policía comunitaria o autodefensa, el de la UPOEG, comandado por Bruno, es el de mayor expansión, con presencia en al menos 21 localidades.

-Si hubiéramos esperado a que el Estado hiciera su trabajo, ya estaríamos muertos ahora -responde Bruno Plácido a una reportera del diario guerrerense *El Sur*. Su

amabilidad choca con su aspecto beligerante. Este hombre de ceño fruncido, que no rebasa el metro y medio de estatura, es el cerebro detrás del grupo de autodefensa más grande del estado. Todos, simpatizantes y enemigos, reconocen su habilidad política. Maneja con maestría términos jurídicos y sabe reaccionar con rapidez ante cualquier cuestionamiento.

Nacido en una población mixteca, en el municipio de Azoyú, Bruno es uno de los fundadores de la Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas –la organización que derivaría en la actual CRAC-. Desde entonces se desempeñaría como policía comunitario raso y, poco a poco, se convertiría en uno de los líderes más importantes de la organización que, en sus mejores tiempos, logró reducir hasta en 90 por ciento los crímenes en la sierra guerrerense.

Sus principales críticos le cuestionan su estrecha cercanía con el gobierno estatal y un protagonismo que no teme pasar por encima de las comunidades. “Es un hombre hábil y de buena fe que no entiende la utilidad de un discurso o de una estructura. Eso generó que se distanciara de la CRAC”, opina Abel Barrera, director del respetado Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan. “El poder de Bruno fue tanto que podía llamarle por celular al (gobernador Ángel) Aguirre o a cualquier diputado. Lo atendían de inmediato”.

Bruno ocupó en 2002 la dirección de la Policía Municipal de San Luis Acatlán y hace dos años fracasó en su intento de ser diputado plurinominal por el PRD.

Luego de su fallida intentona por llegar al Congreso, fundó la UPOEG, una organización de gestión social que desde su inicio ha exigido crear nuevas rutas de transporte, mejorar la infraestructura carretera, además de denunciar las excesivas tarifas de electricidad. Poco después, Bruno entendió que no sería posible gestionar ningún recurso si no se solucionaba primero el grave problema de seguridad en el estado.

Intentó coordinarse con la CRAC para conformar grupos policiacos, pero los dirigentes de aquella acusaron a Bruno de no someter sus decisiones al proceso de asambleas comunitarias, por lo que a fines de 2012 fue separado de la organización por continuar formando grupos armados sin autorización y con la clara intención de combatir al narco, batalla que la CRAC consideraba ajena. Lo señalaron, además, de ser un infiltrado del gobierno de Ángel Aguirre para desestabilizar y dividir a la organización.

A un año de su creación, la UPOEG ha sido criticada con dureza. Le reclaman a Bruno la creación de una organización que obedece, principalmente, a sus intereses y decisiones, a diferencia de la CRAC, que se regula mediante asambleas.

Sin embargo, a pesar de las críticas y los errores, la UPOEG creció. A la fecha tiene presencia en al menos 41 de los 81 municipios del estado; en 14 de ellos conformó un cuerpo policiaco propio y la inseguridad se ha reducido considerablemente. “Ustedes, los medios de comunicación, y el gobierno nos llamaron autodefensa para descalificarnos, porque así era fácil vincularnos con

la guerrilla o con el narco –afirma Bruno con desdén-. No somos autodefensa, somos pueblo. Pueblo organizado, lo cual es mucho más peligroso para el gobierno”.

Oscurece. La casa de Bruno es una construcción casi en obra negra en la colonia Villa Lucerna, casi en las afueras de Chilpancingo. No hay nada adentro sino un par de camas y un desorden de ropa sobre ellas. El piso es de tierra y, a un costado de la habitación, dos gallinas picotean el piso y una pequeña cabra mira todo con indiferencia desde un pequeño corral. El ambiente precario contrasta con la camioneta blindada en la que Bruno se transporta todos los días, una Dnali GMC, con blindaje capaz de resistir ataques de lanzagranadas y lanzacohetes sin mayor problema.

–Yo nací pobre y sigo pobre –cuenta Bruno en la azotea de su casa en donde su esposa ha encendido una pequeña hoguera para calentar atole-. Desde pequeño me acostumbré a dormir bocabajo pa’ no sentir el hambre. Así vivíamos todos acá hace todavía 20 años. Pensando que no merecíamos nada porque éramos indios. Hasta que nos cansamos y decidimos organizarnos. Investigamos cómo se vivía aquí hace años. Los viejos nos enseñaron todo eso.

A lo lejos, la sierra se ha llenado de luces. Bruno Plácido no niega que, en un tiempo, fue cercano al gobierno estatal. Lo importante no era pelearnos, dice, sino llegar a acuerdos. No vencer, sino convencer. En efecto, el cerebro detrás de la UPOEG es un hombre pragmático y sin más ideología que avanzar en el desarrollo social a toda costa, no detenerse ante ningún conflicto.

En medio de la conversación, un alacrán brota de la tierra y hace saltar a sus hijos y a su esposa. El bicho avanza con rapidez entre las piedras, rodeando la pequeña hoguera. Una de las niñas toma una vara ardiendo e intenta azuzar al animal: “Si siente calor, se inyectará su propio veneno”, dice asustada.

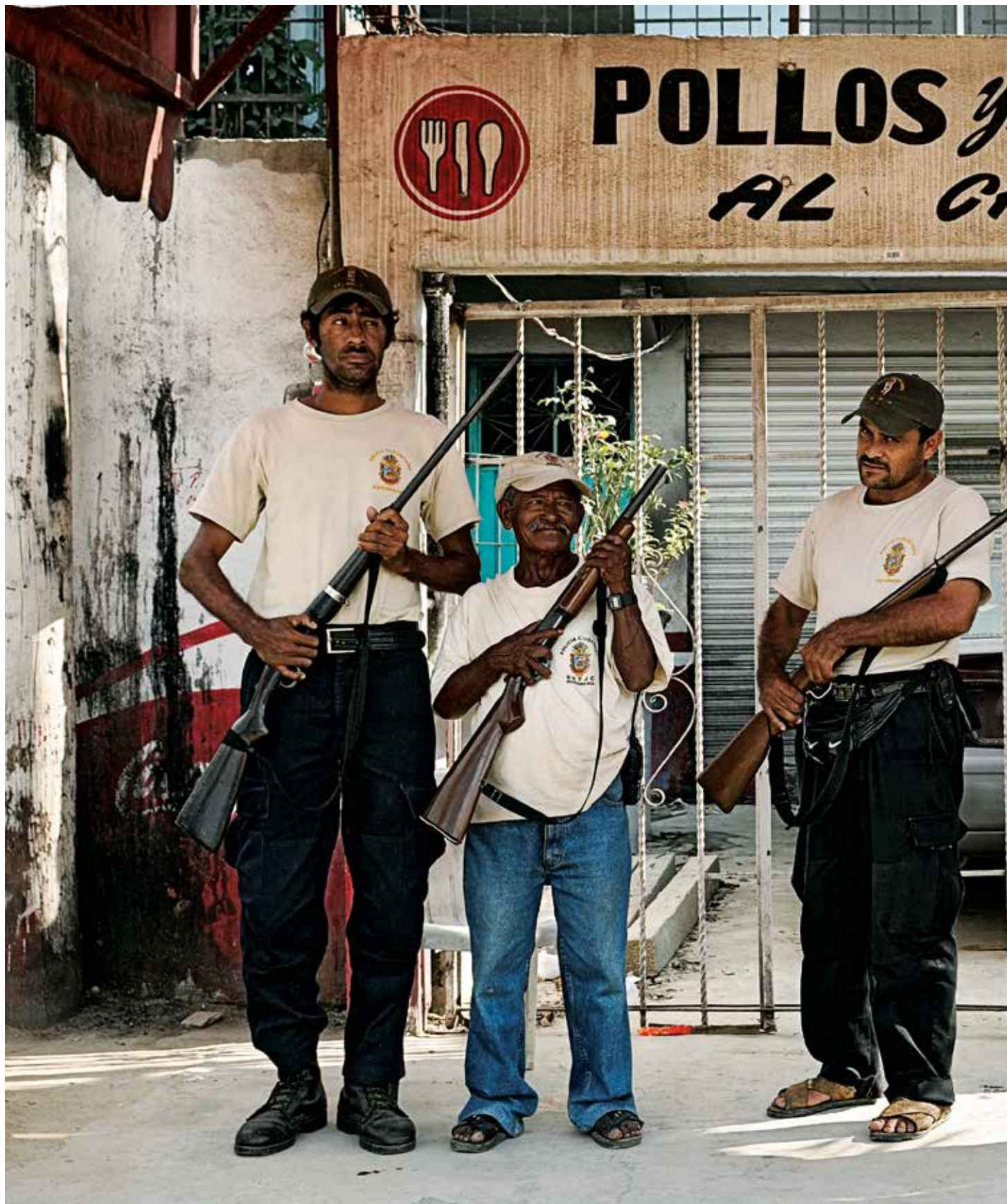
Bruno, sin decir palabra, se levanta de su silla y aplasta al bicho de un certero pisotón de su huarache.

ESCENARIO #4: AYUTLA

Apenas el agua bendita tocó la frente de su hija, Ernesto Gallardo tomó el rifle y reunió a su gente en la cancha de basquetbol de El Mezón, un pueblo diminuto, en donde las casas combaten con la vegetación siempre salvaje de la montaña. Casas pequeñas, blancas, todas con tejado de doble agua.

Gallardo siempre tuvo la sangre caliente. Desde pequeño, su padre, uno de los ganaderos de El Mezón, le enseñó a portar armas y a defenderse de cualquier agravio. Personalmente, afirma, nunca se vio afectado por ningún robo o secuestro. Pero recibía noticias de los robos de ganado, de los cuatreritos que asaltaban los caminos y violaban a las mujeres, de las extorsiones en los pueblos vecinos. Escuchó todo. Entonces supo del secuestro de un niño de 10 años en Cruz Grande. Días después, desapareció una pequeña de 11 años en Ahuacachahue. Pero cuando le cortaron cuatro dedos a un niño en Tecoaapa, Ernesto decidió tomar las armas.

–Junté a un grupo de conocidos y con nuestros rifles





XALIANGUIS
Jóvenes,
campesinos,
comerciantes,
integran la policía
de la comunidad.

empezamos a vigilar los caminos. Estábamos asociados a la CRAC, pero nunca recibimos su apoyo.

Con 29 años, Ernesto posee unos brazos delgados y correosos. Hoy, ha sido nombrado comisario regional de la UPOEG. Después de Bruno Plácido, es el hombre con más autoridad dentro de los grupos de autodefensa. Una pequeña barriga cuelga de su ancho torso. Sus ojos grandes, pelados, que destacan en su rostro tostado, miran con fijeza.

Todo se complicó cuando, en un baile en la cancha de basquetbol del pueblo, Ernesto llamó la atención del *Pata* Bernabé, un vendedor de cocaína. “Le dijimos que no podía vender droga en El Mezón y el tipo se vino a los madrazos. Lo encerramos”. Al otro día, Ernesto tuvo su primer acercamiento con *La Maña*, mote con el que se denomina a cualquier grupo delictivo asociado con el narcotráfico en la Costa Chica. Lo llamaron por teléfono y le preguntaron cuánto quería por soltar al *Pata*. “Si no aceptas dinero, vas a aceptar balas, cabrón”, lo amenazaron cuando se negó a liberar al preso y, un día después, secuestraron a un comandante de la policía comunitaria de Ahuacachahue, el pueblo más cercano.

—Yo les había dicho: “Si me agarras a uno, te agarro a 10” —cuenta Gallardo y su voz presume una seguridad que apabulla. Habla de matar y torturar como algo natural y necesario—. Mi primera orden fue que agarraran a los halcones que trabajaban para ellos. Después, a sus mujeres y a sus hijos. Les dije: “Me los golpeas, cabrón, te los golpeo. Me matas a alguien, te mato a tu gente”.

Bala por bala, muerto por muerto. Ernesto admite que el método puede parecer salvaje, pero en un lugar donde los criminales actúan en contubernio con las policías estatal y municipal, no había otra manera de recuperar el control. Así fue como logró establecer un paréntesis de paz en El Mezón.

Sin embargo, cada que alguien salía del territorio se exponía a todo tipo de abusos. En unos cuantos meses, Ernesto documentó más asaltos, secuestros. A los campesinos de El Mezón se les pidió, además, una cuota de 30 kilos de cosecha por cada temporada.

La gente ya no aguantaba y lo presionaba. “Hay que reventar en Ayutla, comandante”, le decían a Ernesto, quien ya había sido nombrado comandante regional de la UPOEG. Sabía que atreverse a salir del territorio delimitado por la CRAC era exponerse demasiado y al enterarse de sus intenciones, la misma organización lo desconoció. Pero ya no había retorno: el pueblo había donado armas y parque con la condición de que el grupo armado tomara Ayutla.

—Todo estaba puesto, nomás estábamos esperando. Sólo necesitábamos un motivo —explica—. Necesitábamos que los delincuentes nos dieran un pretexto para reventar en Ayutla y justificarnos con el gobierno.

El pretexto llegó. Cuando Eusebio García fue secuestrado la noche del sábado 5 de enero de 2013, unos 240 encapuchados se alistaron para dirigirse a Ayutla con el apoyo de mil 500 civiles que marcharían detrás de ellos. Así que ese domingo 6 de enero, Ernesto tuvo que cancelar la fiesta de bautizo de su hija. Sólo esperó que el

agua bendita tocara la frente de la pequeña para tomar el fusil y reunir a su gente en la plaza principal.

El levantamiento tomó por sorpresa a todos. Nadie sabía de dónde habían salido estos encapuchados justicieros que en sólo tres días detuvieron a 54 presuntos halcones, secuestradores o narcomenudistas en Ayutla.

—El gobierno considera que estamos fuera de la ley —se queja Ernesto y enseguida recita una frase que todos los dirigentes han aprendido de memoria—, pero el artículo 39 de la Constitución nos respalda: “El pueblo tiene el inalienable derecho de modificar o cambiar su gobierno”. Cuando las autoridades hagan bien su trabajo, ese día desaparecemos. El mismo ejército, cuando uno libera la cartilla militar, nos dice: “Estás en la segunda reserva, cuando nosotros fallemos a la nación, es tu labor defenderla”. Ellos a nosotros nos fallaron. Entonces, ¿somos ilegales?

ESCENARIO #5: XALTIANGUIS

A penas clarea, un par de trabajadores de la planta de tratamiento de aguas negras de Xaltianguis llegan a la comisaría del pueblo, una lechería Licons abandonada de donde brota un olor a encierro y humedad. Decenas de policías ciudadanos duermen adentro, apilados en colchones viejos esparcidos sobre el suelo.

—Los comunitarios son un engaño —afirma uno de los hombres. Enjuto, con la piel morena pegada a los huesos y los dientes blanquísimos, el hombre habla con sigilo, como si temiera ser escuchado—. Uno de los que están allí adentro es de *La Maña*, hace un año y medio nos extorsionó, nos golpeó y casi nos mata.

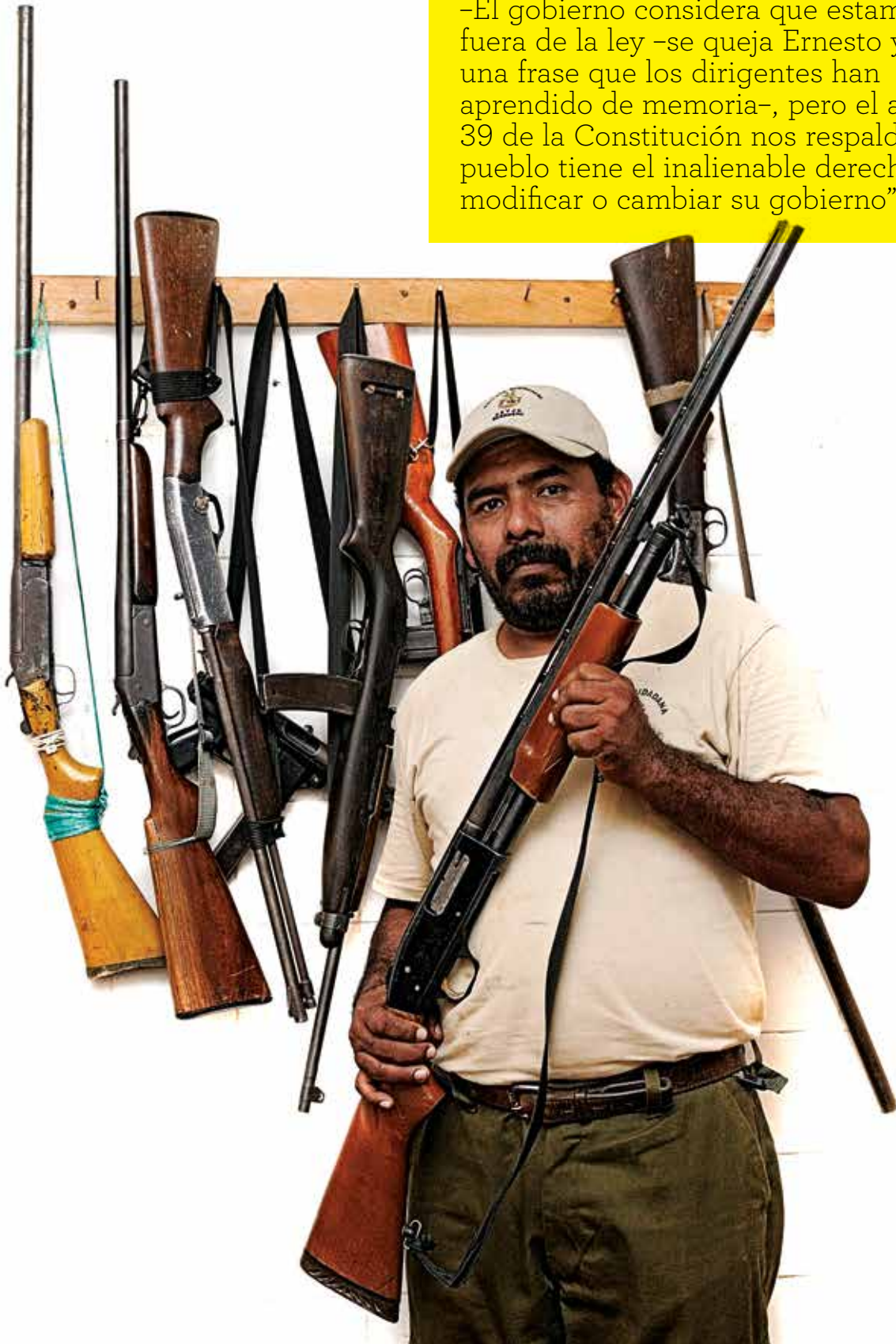
El hombre muestra un par de cartas como prueba. Allí, se le exige pagar 10 mil pesos o atenerse a las consecuencias.

Hace un par de meses, este pueblo edificado a orillas de la carretera fue visitado por decenas de reporteros atraídos por una noticia llamativa. “Más de 100 mujeres toman las armas y se unen a la policía ciudadana de Xaltianguis”, informaron cientos de periódicos nacionales e internacionales, acompañados por imágenes en donde amas de casa, la mayoría madres solteras, aparecían a un lado de los caminos, algunas de ellas en tacones y mallas, recibiendo instrucción sobre manejo de armas. Ahora, sólo dos meses después de esa noticia, las mujeres apenas y aparecen por la comandancia.

—No nos hemos retirado —se apresura a corregir Silvia Hipólito, nombrada comandanta de Xaltianguis—. Entendimos que había pasado ya el momento de combatir al crimen con armas. Más que combatir, ahora hay que prevenir. Restablecer los valores.

Adentro de la comisaría, detrás de un escritorio breve, una computadora obsoleta y una pila de papeles, se halla Miguel Ángel Jiménez Blanco, un ex vendedor de productos cosméticos y naturistas que, cansado de la violencia y las extorsiones, se autonombró comandante de Xaltianguis. Desde marzo de 2013, cada mañana se reportaba con los comandantes de los municipios vecinos, aunque su cuerpo de policía ciudadana no pasaba

“
-El gobierno considera que estamos fuera de la ley -se queja Ernesto y recita una frase que los dirigentes han aprendido de memoria-, pero el artículo 39 de la Constitución nos respalda: “El pueblo tiene el inalienable derecho de modificar o cambiar su gobierno”.





Tierra Colorada
Integrantes de la policía comunitaria de ese poblado realizan labores de vigilancia.

de cinco personas y sus armas eran unas cuantas pistolas rotas, incapaces de disparar una sola bala.

Pronto recibió en su comisaría a comandantes de Ayutla, quienes lo asesoraron sobre la manera de organizarse y de operar bajo los lineamientos de la UPOEG.

Hoy tres mujeres lloran frente a él. Son la esposa, hija y nuera de un hombre desaparecido hace cinco días, junto con su hijo.

—¿Cómo se llama tu papá? —pregunta Jiménez Blanco con aire detectivesco mientras graba las declaraciones en su celular.

—Alfredo Ruiz Hernández, desapareció hace dos días —dice la mujer más pequeña.

—¿Cuántos años tiene?

—Cuarenta y cinco años. Mi hermano, Pedro Ruiz, tiene 20 años.

—¿Y qué pasó?

—Pues hay un sospechoso de secuestrarlo. Se apellida González Parra, alias *El Ratón*; fue a la casa dos veces a querer sacar a mi hermano. Fue a preguntar, lo mandaban a investigar, o algo así.

—¿Tenía problemas tu papá con alguien? —cuestiona el comandante y entonces se hace el silencio. Las mujeres se miran entre sí, sin atinar a responder nada.

—Declara tú, mamá.

—A ver, está en juego la vida de tu papá. O declaran bien, señoras, sin esconder nada, o no podemos operar —las reconviene y las mujeres se enredan en sus propias narraciones, sin lograr explicar qué fue lo que pasó.

—La gente conoce a mi esposo, saben que es un buen hombre. Y ora sí que el que nada debe nada teme, ¿verdad? —comenta la esposa.

—A ver, señora. Le estoy preguntando algo concreto. Me molesta y me enfada que no sea clara. Lo único que está haciendo es poner en riesgo la vida de su esposo, si aún sigue vivo, y hacerme perder el tiempo.

Después de una hora de discusión, el comandante Blanco promete resolver el caso. Las mujeres se van llorando y juran que apoyarán económicamente a la organización si el caso se soluciona.

Todos coinciden: después de que la policía ciudadana fue integrada en agosto, la delincuencia en Xaltianguis es sólo un mal recuerdo. Lo mismo sucede en casi todos los pueblos. Pero la calma se rompe cada cierto tiempo. En el año que lleva operando, se han documentado varios casos de abuso de poder, negligencia y violaciones a los derechos humanos. Además, se dice que el apoyo económico ya no es tan voluntario como en un principio.

—A mí un día *La Maña* me pidió a mi hija. Ningún hombre con un poquito de dignidad soporta eso. La dignidad, eso fue lo que nos hizo organizarnos —relata Héctor, un cincuentón, maestro de veterinaria en la secundaria técnica y vendedor de birria que, hasta hace todavía unos meses, tenía que pagar 500 pesos mensuales por derecho de piso—. Yo fui policía ciudadano un tiempo, pero me retiré porque comencé a detectar abusos. Gente a la que aprehendían sin ninguna razón de peso. Han decodificado droga y, en lugar de quemar los paquetes públicamente, como se acostumbra, se los guardan quién sabe pa' qué. Pero aquí las cosas se arreglaron gracias a la policía ciudadana. Nadie te dirá lo contrario.

Detrás de los dormitorios de la comisaría, a un costado de un baño maltrecho y de un patio diminuto, dentro de una celda de no más de 10 metros cuadrados, dos hombres roncan en colchones raídos. Apoyado sobre los barrotes, un muchacho de 22 años sonríe. Hace dos días era de la policía comunitaria, y hoy está acusado de extorsión y de violencia. Dice que es falso, que todos son rumores, pero en cuanto los trabajadores de la planta de tratamiento lo encaran, el muchacho se suelta a llorar.

—Aquí se hace justicia, no importa si es uno de nuestros miembros —asegura el comandante Jiménez Blanco a los trabajadores que se despiden en el pórtico de la comandancia. Según él, es inevitable que algún miembro de algún grupo criminal se infiltre entre sus filas, pero no duran mucho tiempo, asegura: sus prácticas los delatan—. No somos como el gobierno, aquí no hacemos distinciones. A nosotros nos dicen Los Sin Madre, ¿saben por qué? Porque si nos demuestran que nuestra jefa está coludida con *La Maña*, también a ella la encerramos.

ESCENARIO #6: EL PERICÓN

Durante un buen número de meses, la relación entre el ejército y la UPOEG había sido cordial. Pero el 5 de agosto pasado, la organización estuvo durante tres días y dos noches a 100 miembros del ejército en la comunidad de El Pericón. No hicieron falta armas. Fueron 10 mil personas, campesinos y ganaderos, quienes bloquearon los caminos e impidieron el paso de refuerzos y comida para los militares.

Horas antes, el comandante “Garza” se dirigía, junto con una pequeña comitiva, a Tierra Colorada. Había recibido la orden de reunirse con elementos de la PFP para coordinar operativos en la zona. Desde la detención del titular de Seguridad Pública de Tierra Colorada, ningún cuerpo del estado operaba sin autorización de la UPOEG.

Al atravesar El Pericón, sin embargo, su comitiva fue detenida por el ejército. La versión de los militares es que cinco de las siete armas que portaban los policías eran de alto calibre y de uso exclusivo del ejército. Por su parte, el capitán del puesto, identificado por el apellido Prohm, había sido acusado meses antes por Bruno Plácido y otros miembros de la UPOEG de proteger y esconder a *El Cholo*, uno de los principales sicarios de Ayutla.

Al enterarse de lo ocurrido, Ernesto Gallardo dio la orden: encierren al ejército. La orden no iba para los policías, sino para los habitantes de los pueblos donde ope-

ra la UPOEG. “Nosotros habíamos defendido al pueblo; ahora le pedimos al pueblo que defendiera a su policía”. Al verse rodeados de civiles, el ejército no pudo abrir fuego. Lo importante, dice Gallardo, era evitar cualquier confrontación. Al otro día, el capitán Prohm y otros militares de alto rango huyeron a bordo de un helicóptero, y en el lugar sólo quedaron los soldados rasos.

Hoy el puesto militar luce abandonado. Nada queda de la presencia militar en El Pericón salvo unos cuantos parapetos contruidos con rocas, en medio de un antiguo sembradío de maíz y jamaica.

A unos cuantos metros se encuentra la telesecundaria y la preparatoria del pueblo. “Siempre les pedimos a los militares que se cambiaran de sitio. En caso de un enfrentamiento, las balas podrían alcanzar a los muchachos de la escuela. No nos hicieron caso. Sabían que nunca se enfrentarían a nadie, ellos protegían a los delincuentes”, dice Ernesto Gallardo y señala a lo lejos un árbol casi muerto, un tepehuatl que se alza en la cima del monte. Allí, anudado de la rama más baja, un cable de electricidad cuelga y se enrosca a manera de horca. La población de El Pericón sospecha que el capitán Prohm y sus hombres realizaban torturas en este sitio. Dos agujeros de bala oscurecen la madera del viejo árbol.

—Aquí en El Pericón había toque de queda a las seis de la tarde —cuenta Gallardo mientras se abre paso a través del sembradío. Repite la misma historia que se escucha en toda la zona: extorsiones, secuestros, robos y familias enteras amenazadas—. ¿Los militares? Ahí estaban, en su puesto, sin hacer nada. Seis años de guerra contra el narco sirvieron pa' pura madre. Nosotros con nuestra policía arreglamos las cosas en un mes.

Desde ese incidente, las detenciones y el hostigamiento a los miembros de la organización aumentaron. El gobierno del estado cortó la relación con Bruno Plácido y su grupo. A partir de ese momento, le negó todo tipo de apoyo y reconocimiento. De hecho, la Secretaría de Gobernación interpuso esa semana decenas de denuncias penales por lo ocurrido. Ya existen órdenes de aprehensión en contra de 40 miembros de la UPOEG.

ESCENARIO #7: TLAPA

La situación de Guerrero no debería ser una sorpresa. Que los grupos de autodefensa y las policías populares controlen más de la mitad del territorio se explica por la ausencia de autoridades, la impunidad, la corrupción y, sobretodo, por la extrema pobreza que sufren sus pobladores. Las cifras son demoledoras. El más reciente estudio del Coneval ubica los índices de pobreza extrema sólo apenas por debajo de Oaxaca. En diciembre pasado, las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública ubicaron a Guerrero como el estado con más secuestros a nivel nacional.

Los desaparecidos de la Guerra Sucia en los años setenta, la masacre de campesinos en Aguas Blancas, los estudiantes asesinados en Ayotzinapa, la desaparición de ecologistas en 2012 y otras tragedias han quedado grabadas en la memoria de los guerrerenses; además, el olvido institucional hacia las comunidades indígenas,

ASAMBLEA DE ANIVERSARIO

Cinco mil integrantes de las policías comunitarias realizaron un desfile en Ayutla para demostrar su avance.



Fotografía: El Sur

sumado a la espiral de violencia desatada por la guerra del narcotráfico, han hecho de la insurrección ciudadana la única alternativa posible.

El periodista José Antonio Rivera recorre la zona de La Montaña y la Costa Chica desde hace 20 años. Afirma que la situación está más tensa que nunca. Los grupos de la UPOEG han logrado frenar la delincuencia, pero han mermado la base popular de otras organizaciones, como el EPR que, en su más reciente comunicado, acusó a las autodefensas de actuar “bajo la lógica del paramilitarismo ramplón del siglo XXI, tienen patente de Estado; son grupos de mercenarios que han sido adiestrados conforme a manuales de contrainsurgencia...”.

—La situación es explosiva. No es exagerado decir que se vive un ambiente de preguerra —dice Rivera. En sus ojos se lee una preocupación sincera—. Y la UPOEG está en medio de todo. Si bien un tiempo lograron coordinarse con las autoridades, se han vuelto incómodos para el gobierno, para los grupos radicales, para los militares y para los dirigentes de la CRAC.

La opinión de Rivera es secundada por el antropólogo Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan. Su evaluación es puntual: los resultados favorables de la UPOEG en materia de seguridad son innegables pero, al ser una organización cuyas decisiones y acciones recaen principalmente sobre sus dirigentes, el peligro de que su fuerza sea desarticulada o utilizada por intereses políticos es constante.

No obstante, la falta de respuesta del gobierno y la lentitud de un aparato de seguridad obsoleto, incapaz de responder a las coyunturas y crisis de los pueblos —y muchas veces coludido con el crimen—, obligará, en opinión de Barrera, a que más comunidades se incorporen a las autodefensas y policías populares.

—Tenemos al ejército, a la Marina y a las instituciones policiacas; a la policía comunitaria de la CRAC, a los grupos armados de la UPOEG, a las otras pequeñas autodefensas que han surgido; y al crimen organizado atezando a todo el territorio y buscando la oportunidad de entrar —enumera Barrera—. La pólvora está regada por todo el estado.

ESCENARIO #8: LA ASAMBLEA

Cada cinco segundos, una camioneta repleta de policías ciudadanos cruza la carretera. Llegan por miles desde todos lados. Es fácil reconocer sus vehículos, desbordados de hombres armados con rifles y aparatos de radiocomunicación. Hoy es domingo 5 de enero de 2014. Se cumple un año del secuestro de Eusebio García y del levantamiento armado de la UPOEG y no piensan dejar el día intacto. Hay que mostrar el músculo a todos, que vean que las autodefensas han crecido y no hay manera de hacerlas retroceder.

Un enorme batallón de 5 mil policías se concentra en la gasolinera ubicada en la avenida Reforma, en la entrada a la cabecera municipal de Ayutla de los Libres.

Jóvenes, hombres maduros, ancianos de hasta 80 años. Indígenas, mestizos, campesinos o comerciantes, todos uniformados por la pobreza y el hartazgo. Un contingente de 20 mujeres policías, desarmadas, encabeza la marcha que se dirige a la Unidad Deportiva.

—Este pueblo es histórico —comenta el encargado de un hotel mientras mira a la comitiva—. Aquí se firmó el Plan de Ayutla, ¿sabe? Aquí hemos puesto el ejemplo. Desde la Conquista hemos sido bravos. La gente de aquí es tranquila, aguanta, aguanta, hasta que ya no aguanta y entonces todo revienta. ¿O por qué cree que Guerrero se llama así?

Apoyada por al menos 10 mil civiles, amas de casa, campesinos, comerciantes y ganaderos, bandas regionales y danzantes vestidos de chinelos, diablos y moros, la UPOEG toma la avenida principal.

La marcha transcurre en silencio. Cada fusil lleva atado un listón blanco en señal de paz. Sólo las bandas regionales animan un poco el ambiente. Desde sus azoteas y sus pórticos, la gente los mira y los graba con sus celulares. El comandante Gallardo ordena a sus tropas: “Déntenganme a todo aquel cabrón que grite consignas contra el gobierno. Son infiltrados. No queremos confrontarnos con nadie”. La orden es inútil. Gallardo no puede callar a los civiles que los miran desde sus casas. “¡Muera el mal gobierno!”, gritan algunos. “¡Vivan los comunitarios!”.

Más tarde, en la explanada del deportivo, los principales dirigentes de la UPOEG dan a conocer el posicionamiento político de la organización y los resolutiveos de la asamblea y las mesas de debates realizados un día anterior.

Explicarán que, ya controlado el problema de la inseguridad en la región, comenzará una nueva fase: el desarrollo social será el eje de sus acciones. Los tiempos de la autodefensa han quedado muy lejos. Ahora, la lucha será, sobretodo, a nivel jurídico y político. Se buscará que cada pueblo pueda elegir a sus representantes de manera autónoma, de acuerdo con sus usos y costumbres, sin la participación de los partidos políticos.

—No podemos nacer tontos y morir tontos, compañeros. Aunque sea en el último minuto de nuestra vida, hay que reflexionar —dice Bruno Plácido al micrófono, desde el centro del templete. Lo presentan como el líder moral del movimiento. A su izquierda, Juan Alarcón, director de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; a su derecha, Raúl Fernández, director de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Guerrero—. Nos han vendido la idea de que Guerrero es un estado violento y pobre. Ya les demostramos que la violencia era un problema del estado. No querían resolverlo, porque para ellos cada muerto más representaba un problema menos. Ahora vamos a demostrarles que Guerrero es el estado más pobre también por culpa suya.

ESCENARIO #9: LA CÁRCEL DE EL MEZÓN

Eimer Guzmán ha vivido en esta cancha de basquetbol desde hace 10 meses. Acusado de doble asesinato y del secuestro de siete personas, sus manos no dejan de temblar mientras camina en círculos

y demanda a gritos su libertad. A cada alarido, su dentadura desencajada por las muecas muestra varios agujeros.

Aquí todos juran que son inocentes. Lo dice Carmelo, un joven de 21 años. En su rostro moreno cuelga una sonrisa incrédula y en su brazo un rústico rifle de caza. Hace unos meses que se enlistó en los grupos de autodefensa. Trabaja aquí, en mitad de la sierra, sin recibir sueldo, cuidando a los presos que la policía ciudadana decide no entregar a las autoridades oficiales. En poco tiempo ha visto a presuntos homicidas, secuestradores, narcotraficantes, ladrones de ganado que son retenidos aquí, mientras son investigados o se decide qué hacer con ellos.

Y esa indecisión es una de las grandes debilidades del sistema de seguridad y justicia de la UPOEG. Los detenidos por la organización se convierten en unos parias de la justicia. “Quedan en el limbo total, no hay ningún tipo de certeza y su futuro lo deciden los comandantes regionales”, dice Abel Barrera.

Por otro lado, los presos entregados al Ministerio Público suelen salir a los pocos meses por falta de pruebas. “La UPOEG hace investigaciones muy bien sustentadas. Pero no han entendido la importancia de redactar documentos que certifiquen la culpabilidad de sus detenidos. Por eso es que la mayoría de los entregados recuperan su libertad a los pocos días”.

Si cualquier extraño pasa por aquí, le costaría descubrir que esto es una prisión al aire libre. Este día, los reclusos no superan la docena y más que delincuentes parecen muchachos resguardados del calor bajo el techo de lámina de la cancha. Nadie está esposado y las celdas sólo son usadas para dormir. Su única atadura son los rifles con que Carmelo y otro par de hombres los vigilan.

Eimer Guzmán habla sólo con la condición de que los guardias se alejen. Aunque su garganta se cierra y las palabras se le desbaratan entre los pocos dientes que aún conserva, alcanza a repetir que es inocente antes de romper en llanto. Él no mató a los dos chavos que aparecieron balaceados en El Carrizal; tampoco secuestró a nadie en Ayutla, como se le acusa. Eso dice. En los 10 meses que lleva aquí, denuncia, no se le ha permitido mirar a su familia ni hacer llamadas telefónicas. Acusa de tortura a los policías ciudadanos. A cada queja su nariz escurre. No aprendió nunca a leer y ya olvidó cómo escribir su nombre. Muestra su credencial de elector sin soltarla, aferrándose a ella como se aferraría un naufrago a un bote salvavidas.

Atrás de él, los guardias civiles miran el piso. Aseguran que este hombre ha sido investigado, que es un asesino y que no piensan soltarlo por temor a que salga de la cárcel bajo fianza o por irregularidades en el juicio. Saben que tampoco ellos están a salvo de los errores. Lo reconocen abiertamente. Pero el mayor error fue dejar, durante tanto tiempo, su seguridad en manos de las autoridades.

A partir de ahora, dicen, en Guerrero, la justicia está en sus manos. Y ya no piensan soltarla. **09**